

12 de abril de 2022

Propuesta de incluir una sesión sobre los Derechos de la Naturaleza en la Conferencia de las Partes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (ACUERDO DE ESCAZÚ)

Como defensor de los Derechos de la Naturaleza, Earth Law Center, aspira a proteger toda la vida del planeta. Trabajamos para desafiar la concepción antropocéntrica de la Naturaleza apoyando el movimiento liderado por la comunidad para el reconocimiento de la Naturaleza como sujeto de derechos y ayudando a la redacción de políticas y leyes centradas en la Tierra.

El movimiento por los Derechos de la Naturaleza forma parte del enfoque ecocéntrico del derecho ambiental. Al igual que los humanos, la Naturaleza tiene derechos inherentes, que provienen de su existencia. Este enfoque de la protección de la vida en el planeta pretende cambiar nuestra percepción de la Naturaleza de meramente un objeto de propiedad a sujeto de Derechos. Esta teoría no es reciente y se inspira en la tradición indígena que tiene un mayor respeto y comprensión de nuestra interconexión e interdependencia con nuestro entorno. El ámbito de protección de los Derechos Humanos se ha ampliado con el tiempo a nuevos grupos, como las mujeres, los niños. Por tanto, el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza es el siguiente paso lógico hacia la universalidad de los derechos humanos.

Ya hay muchos casos de gobiernos locales y nacionales que han presentado leyes que conceden derechos a la Naturaleza o a sus elementos. En el Caribe y América Latina, fuertemente influenciados por las tradiciones indígenas, muchos Estados han tomado parte en el enfoque ecocéntrico de la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador de 2008 incluye el derecho de la Naturaleza a existir, mantener y regenerar sus ciclos naturales, estructuras, funciones y procesos. Ecuador no es el único signatario del Acuerdo que cuenta con legislación sobre los Derechos de la Naturaleza, Bolivia y Belice también han promulgado estas disposiciones en su legislación nacional, mientras que Argentina, Costa Rica e incluso Perú lo han hecho a nivel local.

También nos gustaría reconocer los esfuerzos de algunos signatarios para implementar una nueva legislación ecocéntrica, como Guatemala, Panamá y Perú, que actualmente están revisando proyectos de ley sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Por último, pero no por ello menos importante, el derecho a la existencia de la naturaleza también ha sido reconocido por los tribunales de los Estados Partes del Acuerdo de Escazú, especialmente en Colombia, Brasil y México.

Las Partes del Acuerdo de Escazú deberían considerar la incorporación de los derechos de la naturaleza en el tratado. Una posibilidad es convertir a la propia "Naturaleza" en la 13ª Parte del Acuerdo de Escazú, tratando así a la Naturaleza como beneficiaria de los derechos de acceso: información, participación pública y justicia. Esta propuesta se basa en los aspectos

innovadores del Acuerdo y en su especial atención a las "personas o grupos en situación de vulnerabilidad".

El artículo 2 puede interpretarse como una protección de los derechos de acceso a la Naturaleza, especialmente en aquellos Estados que ya han reconocido los Derechos de la Naturaleza. El artículo 2 (d) define el "público" de la siguiente manera:

Una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos creados por esas personas, que sean nacionales o estén sometidos a la jurisdicción nacional del Estado Parte.

La naturaleza se define como una "persona jurídica" o entidad legal que está sujeta a derechos en jurisdicciones como Bolivia, Colombia (vía decisión de la Corte), Ecuador y próximamente Panamá, junto con muchas otras jurisdicciones subnacionales.

El artículo 2(e) establece que "las personas o grupos en situación de vulnerabilidad" deben estar en el "contexto nacional" de cada Estado Parte. Como se ha dicho anteriormente, existe un movimiento creciente para el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza entre los firmantes del Acuerdo, y por lo tanto, para aquellos que han promulgado dicha legislación, es imperativo conceder derechos de acceso para asegurar la aplicación efectiva de los derechos sustantivos ya establecidos. El Acuerdo deja ciertamente un margen de interpretación sobre quiénes son los beneficiarios de sus disposiciones; por ello, proponemos que se reconozca a la Naturaleza como sujeto de Derechos bajo el Acuerdo de Escazú y se le otorguen derechos de acceso.

Aunque creemos que las Partes del tratado ya deben aplicar las protecciones del Acuerdo de Escazú a la Naturaleza o a determinados ecosistemas cuando se les reconozca como persona jurídica o sujeto de derechos, recomendamos que se haga una interpretación evolutiva del tratado para aclarar el alcance de la protección.

También le recomendamos que considere varias enmiendas o interpretaciones de otras partes del tratado para facilitar los derechos de la naturaleza en el contexto de los derechos de acceso al medio ambiente.

Por ejemplo, el artículo 7 del Tratado, relativo a la participación del público, plantea varios retos en cuanto a la representación de la Naturaleza y sus elementos.

Hay que tener en cuenta que la representación de la Naturaleza en los procesos de toma de decisiones medioambientales debe llevarse a cabo en virtud de sus "intereses de bienestar" para los que se concedieron sus derechos medioambientales en primer lugar. Por lo tanto, su alcance debe respetar las disposiciones legales y las sentencias de los tribunales existentes en cada jurisdicción. Además, esta propuesta implica que el gobierno establezca una directriz más clara sobre la representación y la participación. Se necesita un marco institucional adecuado para la representación efectiva de los intereses del bienestar de la naturaleza, a

través de organismos de tutela, así como procedimientos y políticas que garanticen la transparencia, el establecimiento de objetivos, el ajuste de incentivos y la prevención de conflictos.

Según el artículo 8, todos los firmantes deben hacer efectivo el acceso a la justicia, lo que es esencial para regular las omisiones relacionadas con el acceso a la información ambiental o la participación pública en el proceso de toma de decisiones. Además, cuando los actos u omisiones pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente, violando los derechos ambientales, se debe poder evitar oportunamente dichas violaciones. Por lo tanto, los Estados parte deben implementar mecanismos judiciales y administrativos para proteger los derechos de acceso a la Naturaleza.

El artículo 6 supone un nuevo reto para la inclusión de la Naturaleza en el tratado, ya que la información ambiental necesaria para proteger los derechos ambientales del ser humano no siempre es suficiente para proteger los derechos ambientales de la naturaleza. Es necesario que haya acceso a la información ambiental sobre cómo preservar la estabilidad ecológica de la Naturaleza. Aunque la información necesaria es hoy en día cualitativamente identificable y cuantitativamente medible, faltan incentivos para investigar en ese ámbito. Sin embargo, el movimiento ambiental, social y de gobernanza en el sector financiero podría contribuir a la evolución del acceso a la información adecuada, esencial para medir si se están protegiendo los derechos de la naturaleza.

En adelante, el ámbito de aplicación del Acuerdo de Escazú debería ampliarse a la Naturaleza como sujeto de Derechos, al menos en los países con legislación promulgada sobre los derechos de la Naturaleza para garantizar la efectividad de sus derechos sustantivos. Esta evolución en el Acuerdo de Escazú requeriría un apoyo adicional a los Estados parte para la aplicación de los derechos de acceso de la Naturaleza.

Nos gustaría ofrecer nuestra ayuda para celebrar una sesión sobre los Derechos de la Naturaleza. Earth Law Center tiene un Programa para América Latina con una oficina en la Ciudad de México y es miembro del Consejo Económico y Social de la ONU. Earth Law Center puede ser un recurso si necesita más información sobre la aplicación de las leyes de la Tierra.



EARTH LAW CENTER

PO Box 3164 Boulder, CO 8030 (USA)

gwilson@earthlaw.org

jruiz@earthlaw.org

English version

Proposal to include a session on the Rights of Nature at the Conference of the Parties to the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean (ESCAZU AGREEMENT).

As an advocate for the Rights of Nature, Earth Law Center aims to protect all life on the planet. We work to challenge the anthropocentric conception of Nature by supporting the community-led movement for the recognition of Nature as a subject of rights and by assisting in the drafting of Earth-centered policies and laws.

The Rights of Nature movement is part of the ecocentric approach to environmental law. Like humans, Nature has inherent rights, which stem from its existence. This approach to the protection of life on the planet aims to change our perception of Nature from merely an object of property to a subject of rights. This theory is not recent and is inspired by the indigenous tradition that has a greater respect and understanding of our interconnectedness and interdependence with our environment. The scope of protection of human rights has expanded over time to new groups, such as women and children. Therefore, the recognition of the rights of Nature is the next logical step towards the universality of human rights.

There are already many cases of local and national governments that have introduced laws granting rights to Nature or its elements. In the Caribbean and Latin America, strongly influenced by indigenous traditions, many states have taken part in the ecocentric approach to environmental protection. For example, Ecuador's 2008 Constitution includes the right of Nature to exist, maintain and regenerate its natural cycles, structures, functions and processes. Ecuador is not the only signatory to the Agreement to have legislation on the Rights of Nature; Bolivia and Belize have also enacted these provisions in their national legislation, while Argentina, Costa Rica and even Peru have done so at the local level. We would also like to acknowledge the efforts of some signatories to implement new ecocentric legislation, such as Guatemala, Panama and Peru, which are currently reviewing draft laws on the recognition of the rights of nature. Last but not least, the right to the existence of nature has also been recognized by the courts of the States Parties to the Escazú Agreement, especially in Colombia, Mexico and Brazil.

The Parties to the Escazú Agreement should consider incorporating the rights of nature into the treaty. One possibility is to make "Nature" itself the 13th Party to the Escazú Agreement, thus treating Nature as a beneficiary of the rights of access: information, public participation and justice. This proposal is based on the innovative aspects of the Agreement and its special attention to "persons or groups in vulnerable situations".

Article 2 can be interpreted as a protection of the rights of access to Nature, especially in

those States that have already recognized the Rights of Nature. Article 2(d) defines "public" as follows:

One or more natural or legal persons and associations, organizations or groups created by such persons, which are nationals of or subject to the national jurisdiction of the State Party.

Nature is defined as a "legal person" or legal entity that is subject to rights in jurisdictions such as Bolivia, Colombia (via Court decision), Ecuador and soon Panama, along with many other subnational jurisdictions.

Article 2(e) states that "persons or groups in situations of vulnerability" must be in the "national context" of each State Party. As stated above, there is a growing movement for the recognition of the Rights of Nature among the signatories to the Agreement, and therefore, for those that have enacted such legislation, it is imperative to grant access rights to ensure the effective implementation of the substantive rights already established. The Agreement certainly leaves room for interpretation as to who are the beneficiaries of its provisions; therefore, we propose that Nature be recognized as a subject of Rights under the Escazú Agreement and be granted access rights.

While we believe that Parties to the treaty should already apply the protections of the Escazú Agreement to Nature or to certain ecosystems when they are recognized as a legal person or subject of rights, we recommend that an evolutionary interpretation of the treaty be made to clarify the scope of protection.

We also recommend that you consider various amendments or interpretations of other parts of the treaty to facilitate the rights of nature in the context of environmental access rights.

For example, Article 7 of the Treaty, concerning public participation, raises several challenges regarding the representation of Nature and its elements.

It should be borne in mind that the representation of Nature in environmental decision-making processes must be carried out by virtue of its "welfare interests" for which its environmental rights were granted in the first place. Therefore, its scope must respect existing legal provisions and court rulings in each jurisdiction. In addition, this proposal implies that the government establishes a clearer guideline on representation and participation. An adequate institutional framework is needed for the effective representation of nature's welfare interests, through guardianship bodies, as well as procedures and policies that ensure transparency, target setting, incentive setting and conflict prevention.

According to Article 8, all signatories must provide effective access to justice, which is essential to regulate omissions related to access to environmental information or public participation in the decision-making process. In addition, when acts or omissions may have a negative impact on the environment, violating environmental rights, it must be possible to prevent such violations in a timely manner. Therefore, States Parties must implement judicial and administrative mechanisms to protect the rights of access to nature.

Article 6 poses a new challenge for the inclusion of Nature in the treaty, since the environmental information needed to protect human environmental rights is not always sufficient to protect the environmental rights of nature. There is a need for access to environmental information on how to preserve the ecological stability of Nature. Although the necessary information is nowadays qualitatively identifiable and quantitatively measurable, incentives for research in this area are lacking. However, the environmental, social and governance movement in the financial sector could contribute to the evolution of access to adequate information, which is essential to measure whether the rights of nature are being protected.

Henceforth, the scope of application of the Escazú Agreement should be extended to Nature as a subject of Rights, at least in countries with enacted legislation on the rights of Nature to ensure the effectiveness of its substantive rights. This evolution in the Escazú Agreement would require additional support to States Parties for the implementation of Nature's access rights.

We would like to offer our assistance in holding a session on the Rights of Nature. Earth Law Center has a Latin America Program with an office in Mexico City and is a member of the UN Economic and Social Council. Earth Law Center can be a resource if you need more information on Earth law enforcement.

With sincere appreciation for any action you take to advance the Rights of Nature. Sincerely, the undersigned:



EARTH LAW CENTER

PO Box 3164 Boulder, CO 8030 (USA)

gwilson@earthlaw.org

jruiz@earthlaw.org